

**: "Respetuosa que soy del valor de las palabras, comprendiendo que en voz de un Presidente, más que intenciones son compromisos a nombre de la institución que representa; también he aprendido que la sociedad, el pueblo que ha vivido, distinguido y desmitificado un cúmulo de ofertas y propuestas, al final sólo tiene un veredicto sobre el gobernante, y es el que se deriva de sus actos, de sus resultados, al hombre público se le evalúa por su capacidad de hacer, los propósitos lo significan, los hechos lo califican".
Beatriz Paredes/ 1 de sept.2001. respuesta al informe presidencial**

Ciudadanos, cueste lo que cueste

Elisa Carrió y Rodolfo Terragno cruzan acusaciones sobre sus posturas durante el primer tramo del gobierno de la Alianza. Difieren también sobre el modo de recomponer una alternativa hacia el futuro. Y acuerdan en la necesidad de establecer otro vínculo entre el ámbito privado y el Estado.
VICENTE MULEIRO Y LILIANA MORENO

MAS INFORMACION

La limpieza del gasto

La clientela compartida

A qué creen ustedes que obedeció el llamado a plebiscito del Presidente para reformar la política?

Elisa Carrió—Ese llamado formó parte del cinismo del régimen. De la Rúa tuvo dos años para hacer la reforma. No lo hizo. Para mí, la reforma política fue plebiscitada en la elección del '99. Hoy sólo el autismo puede permitir creer que con el plebiscito el Gobierno puede compensar la derrota electoral de octubre. Es mejor asumir las responsabilidades de una derrota que inventarse la jugada de decir no fui derrotado porque gané un plebiscito sobre algo que ya fue plebiscitado. Y traicionado.

Rodolfo Terragno— El argumento que se utiliza es que a la reforma política la deben materializar los legisladores, que son políticos y, por lo tanto, son renuentes. Se dice entonces que hay que forzarla a través de una manifestación popular. No creo eso: me parece que la manifestación popular es preexistente. No creo tampoco que sea imposible forzar esa reforma en un país donde se ha obligado a legisladores a votar una ley por la cual se le roba parte de su ingreso a jubilados que ganan quinientos pesos. Si hay voluntad y se ejerce la misma presión que se ha ejercido para propósitos innobles, la reforma política se puede conseguir.

—Para ustedes ¿la reforma política es un tema de primer orden? ¿En qué términos habría que reformarla?

Carrió—La reforma política para mí no pasa por donde quiere hacerla pasar el gobierno. Sí pasa por el financiamiento porque la construcción del Estado mafioso viene justamente de la complicidad entre el Estado y los partidos que se da en el financiamiento. No hay banquero ni empresario que no haya financiado a los partidos tradicionales en la Argentina. Pero voy a hacer una salvedad, con todo el respeto que le tengo a Terragno, la Argentina necesita testimonios. Yo que he pasado la persecución y el aislamiento en el partido cuando vos (a Terragno) eras jefe de gabinete, te digo que el decreto de reducción salarial fue firmado por vos en su momento, en junio del año pasado. Te recuerdo que cuando nosotros advertimos que esto iba a involucrar de ajuste en ajuste a mí me trataban de loca y de mística.

Terragno—Yo no.

Carrió—Vos no. Pero me trataban de loca y de mística por prevenir este desastre. Hay que poner las cosas en su lugar. En ese sentido la reforma no pasa por los sueldos de los legisladores honestos que se van a ir de la política porque no puede sustentarse, pasa por la corrupción en la política y por la confusión entre los intereses privados y públicos. Es decir, cuando yo pongo funcionarios que son lobbistas de intereses privados, estoy generando un gasto de la política que es incontrolable.

—Carrió mencionó la palabra arrepentimiento. ¿Qué tiene que decir con respecto a esto?

Terragno—Hay varias cosas que me gustaría contestar. Creo que la política, cuando se ejerce con honestidad, es un ejercicio de aprendizaje. Me parece que así como ella, en la interna, apoyó la candidatura de Fernando de la Rúa contra la mía, espero que hoy reconozca que no hay nada en la gestión de De la Rúa que no fuera previsible desde el principio.

Carrió—¡Pero vos fuiste jefe de Gabinete!

Terragno—Precisamente, mi lección es que uno, a veces por un exceso de confianza, cree que puede torcer ciertos rumbos. Yo peleé mucho contra los ajustes desde el primer día, eso fue público y generó mucha disfunción en el gobierno al punto que al final el Presidente me pidió que me fuera. Pero es cierto que yo creía que para torcer ese rumbo equivocado en vez de abandonar el barco, tenía que compartir responsabilidades. Fue un error. No tengo inconveniente en decir que la advertencia de Carrió, en su momento, fue correcta.

Carrió—Yo tampoco tengo inconveniente en decir que apoyé a De la Rúa. Siempre digo una frase que molesta pero que es cierta: "Nunca pensé que De la Rúa era erótico, ni revolucionario, ni progresista". Primero defendí al candidato del partido radical. Y creía que al menos era consistente en cuanto a los valores republicanos básicos. Me equivoqué y no me lo voy a perdonar en toda la vida. Cuando De la Rúa convalida los sobornos en el Senado con el ascenso de (Alberto) Flamarique me dije "No hablo más con De la Rúa" y como con mis ex maridos, no hablé más. Esto tiene que servir de lección para todos, en términos de que en política hay que hacer lo que se debe hacer en lugar de decir: "como estamos en 70 por ciento de imagen podemos convalidar todo".

Terragno—Creo que otra lección que nos ha dejado esto es la necesidad de una acción solidaria entre quienes piensan igual. Cuando yo era jefe de gabinete y los diarios reflejaban día a día mis discrepancias y parecía que yo estaba en la cuerda floja, también sentí la soledad porque me daba cuenta de que había muchos legisladores y dirigentes que, precisamente en un momento de alta popularidad presidencial, no querían pegarse a un disidente.

—Carrió habla de una relación corrompida entre los privados y la política ¿cómo se encararía un saneamiento?

Terragno—Creo que lo primero que se necesita es cortar drásticamente la necesidad de financiamiento de la política. En otros países las campañas son muy breves y hay veda política fuera de los periodos permitidos para hacer campaña. No se permite a los partidos o a los candidatos comprar espacios ni en la televisión, ni en las radios ni en los diarios. Es el caso de Gran Bretaña. Los medios de comunicación tienen, en esos breves periodos, que ceder espacios gratuitos para la difusión, no de spots sino de propuestas. Porque cuando cualquier partido o candidato puede gastar lo que quiere, se entra en competencia. Cada uno piensa que queda en desventaja si no iguala o se aproxima al gasto del otro. A eso se agrega que no hay en Argentina verdaderas auditorías del gasto. Hay declaraciones unilaterales que si uno las analiza no se corresponden con la magnitud del gasto ostensible, visible.

—¿No se está imponiendo una agenda? ¿o es urgente abordar esto?

Carrió—Es absolutamente demagógico y mentiroso. El tema hay que abordarlo pero no desde el lugar desde el que se lo trata hoy. Hay que dar los debates sin demagogia. Todo el mundo sabe que yo era una exitosa jurista con ingresos muy superiores al que tengo. La cuestión no pasa por el sueldo de un diputado que trabaja y es honesto. Pasa, en todo caso, por un diputado que no trabaja o que coimea. Porque en realidad el corrupto es el más generoso: es el que dona todo porque finalmente tiene ingresos por otro lado. Acá hay que hacerle entender a la opinión pública la trampa en la que la está metiendo el gobierno y, básicamente, Cavallo y su grupo que siempre han sido financiados por los grupos privados. Hay que prohibir el financiamiento empresarial privado.

—¿Prohibir?

Terragno—En la medida en que los aportes sean limitados y públicos se puede tolerar. Desde luego preferiría un financiamiento público transparente, pero ante todo preferiría esa restricción que elimine la necesidad del gasto. Tanto Carrió como yo hemos hecho una experiencia contra quienes nos dicen que no se puede hacer política sin dinero.

Carrió—Hay dos puntos que me parecen centrales. En primer lugar, que la corrupción es la contracara de la pobreza y la cooptación de la clase política. Yo le creo a un altísimo empresario cuando me dijo: "Nos obligaron a ser corsarios". También creo que hay empresarios que son corsarios por naturaleza. Pero a algunos los obligaron a ser corsarios.

Terragno—Descreo de esas obligaciones.

Carrió—La segunda cuestión es que el gasto de la política está en la función de gobierno, en el precio con el que se paga el financiamiento de campaña. El problema no es que te pongan 200 mil pesos, el problema es que después te cobran millones en sobreprecio en las licitaciones. Creo que este país ha tenido una enorme confusión en lo que ha sido la penetración del sector privado en lo público. Y acá voy a tener que tocar un ejemplo que puede molestar. Creo que hay personas que perteneciendo a lo privado, con una altísima vinculación con lo privado, deben separarse en ese cargo cuando están en lo público. Es el caso de (Daniel) Montamat, jefe de asesores económicos tuyo (a Terragno). Montamat tenía una consultora, asesoraba empresas energéticas, fue cuestionado por la Oficina Anticorrupción. Nosotros como líderes tenemos que tener cuidado porque esa confusión entre el interés público y el privado complica la representatividad. ¿A quién represento? ¿Al pueblo de la Nación argentina cuando soy secretario de Energía o a los intereses que representé antes? Separar lo público de lo privado le va a hacer bien a lo privado porque van a dejar de ser corsarios, porque las reglas de juego van a ser claras para todos, porque en un capitalismo serio todos compiten en igualdad de condiciones. Ayer, desde los más altos sectores empresarios alguien me decía que ya todos los partidos empezaron a pedir dinero. Cuando el Presidente tiene como asesor a un señor como (Fernando De) Santibañez, cuando tiene al lado a

otro señor como (Enrique) Nosiglia, está definida la carrera: "Dime con quien andas y te diré quién eres".

—¿Es posible que no vuelva a suceder?

Terragno— En primer lugar creo que no deberíamos hacerle a los corruptos el favor de mezclarlos con la gente honesta. Eso es lo que necesita la gente de malvivir que ronda por la política. El caso de Daniel Montamat me parece un ejemplo de conducta. Cuando el presidente le ofreció la secretaría de Energía, que no se la podía ofrecer a un veterinario, sino a alguien que tuviera experiencia y vinculación con el sector, Montamat se presentó espontáneamente con un escrito a la Oficina de Anticorrupción señalando que le había sido ofrecido ese cargo e indicando todas los clientes de su estudio y todos los casos en los que había intervenido y pidiendo que la Oficina le indicara si él podía aceptar ese cargo y en qué condiciones. La oficina se expidió indicándole que podía aceptar el cargo pero debía excusarse en todos los casos que directa o indirectamente tuvieran que ver con las empresas que él había asesorado. Así se hizo. Estoy de acuerdo en la necesidad de cortar esa vinculación entre intereses privados y públicos. No estoy muy convencido, en cambio, de la inocencia de los empresarios a los cuales los obligan a ser corsarios ni creo que en la Argentina, y para el caso en los Estados Unidos o en Europa, el sector privado sienta que lo que más le conviene es la transparencia.

Carrió— El punto hoy en América latina es mucho más grave. Corrupción en el financiamiento hay en todos los países del mundo, pero en América latina se agrava por la economía ilegal, porque América latina se ha convertido en un lugar donde el tráfico de armas y el narcotráfico toman territorios.

Terragno—Quiero insistir en que me parece parece más eficaz prohibir el gasto que prohibir el financiamiento. Cuando uno reduce el gasto al mínimo también reduce las chances de financiamiento en negro. Porque el Cartel de Medellín no va a venir a hacer una contribución a un partido y va a pedir recibo.

Carrió—Comparto pero agrego: esto no termina con el gasto de la política. Si no aniquilamos el Estado mafioso y cambiamos la matriz del Estado, esto sigue. Y en esto soy muy dura en las penas. Hoy los delitos de enriquecimiento ilícito y fraude a la administración pública son excarcelables. Es decir que si a un funcionario público lo pescás en un montón de delitos puede tener un sinnúmero de procesos: de hecho (Armando) Caro Figueroa, Castañón, Cavallo, están con procesos y ascienden. Creo en la política, creo profundamente. La experiencia de la antipolítica es la experiencia más corrupta.

—¿No se está generando un discurso de arrinconar a la política como estorbo?

Terragno—Creo que hay una campaña contra la política no sólo en la Argentina. Hay un fenómeno latinoamericano que empezó con (Alberto) Fujimori, con (Hugo) Chávez, con (Fernando) Collor de Melo. Es muy interesante verlo en las estadísticas: cuando se cuestiona el costo de la política se dice que la política le cuesta a la Argentina 20 mil millones de dólares anuales. Esa cifra surge de un estudio que hizo el grupo Sofía, que está mal utilizado. El grupo estableció que el funcionamiento del Estado nacional en todos sus niveles cuesta 19.470 millones.

—¿Cuánto cuesta una dictadura, entonces?

Terragno—Claro. Con una dictadura ahorraríamos. Está bien hecho el trabajo pero está mal usado porque efectivamente es el ahorro que produce una dictadura y bueno, eso ya lo experimentamos. Con ese sentido Onganía llegó para terminar con la partidocracia y cerró todos los poderes

deliberativos, prohibió los partidos políticos y confiscó sus bienes. Lo mismo hizo Videla. Fueron años de retraso económico, no sólo de un horror que produjo daños irreparables en la sociedad.

—¿Qué tipo de poder representa la dupla De la Rúa-Cavallo?

Terragno—Creo que la política que se está llevando a cabo, y que ejecuta en lo económico Cavallo, es una política primero de concentración de ingresos, que es otra forma de inmoralidad y corrupción porque concentrar el ingreso, en definitiva, es robarles a los que tienen menos para darles más a los que ya tienen mucho. Y ésta también es una forma de corrupción aunque no estemos acostumbrados a verlo de esta manera. Cuando uno analiza las economías más exitosas, los países con más alto ingreso per cápita del mundo —los nórdicos, Suiza— no tienen ni por asomo la concentración de Argentina. Creo que este es un proyecto que aquí ya lleva muchos años y que ha derivado en la gran defraudación que la gente siente.

—¿La Alianza está fuera del gobierno?

Terragno—Yo creo que sí.

Carrió—Yo tengo un miedo. A mí me ofrecieron ser candidata a senadora en un megaacuerdo con toda la Alianza. Pero yo dije claramente que es antiético para mí. Puede ser distinto para él y lo respeto. Pero yo no puedo hacer un discurso desde el partido de gobierno contra el mismo gobierno. Cómo yo voy a ser la gran opositora de De la Rúa desde la Alianza que llevó a De la Rúa al poder. La otra cuestión es que yo creo que Terragno va a cumplir con su promesa pero la pregunta que me hago es ¿los que van detrás de Terragno, cómo van a votar?

Terragno—Yo aspiro a que la gente me confiera un liderazgo, un poder para orientar a los que quieren la reconstrucción de la Alianza. Como presidente de la UCR impulsé la Alianza. Carrió me apoyó para que fuera presidente de la UCR, y fue una de las primeras que apoyó, sino la primera, la idea de la Alianza, cuando teníamos la resistencia casi universal en el partido y en el Frepaso. Con ese antecedente y todo lo que aprendí de mis aciertos y tal vez más de mis errores, quiero conducir esta recomposición.

Carrió—Terragno es un hombre usado por la UCR, no lo quieren adentro, la oligarquía partidaria no lo quiere. Los que están aliados con él hablan barbaridades de él. Y no lo quieren, vamos a decir las cosas por su nombre. Hay una relación de uso por imagen. El sabe que es verdad. Acá hay candidatos a diputados y a senadores tuyos que no van a votar tu discurso. No lo van a votar, Rodolfo.

Terragno—Sé que en política se usa al otro. Y sé algo peor, que se usa a la gente, al votante. Me parece que todos quienes tenemos cierta experiencia estamos prevenidos. No quiero dar la impresión de que cuando cometí errores fui usado, fui responsable de mis propios errores. Incluso cuando fui consciente de que el Presidente no tenía una política económica propia y estaba sujeto a la presión de los intereses financieros, creía que había que luchar desde dentro. Y cuando uno es un empleado, siendo ministro uno lo es, tiene sus limitaciones. Fue mi responsabilidad. No podría eximirme de ningún error diciendo me usaron.

—¿Qué los une y qué los separa?

Terragno—Creo que Carrió ha destruido uno de los mitos más perniciosos de la política argentina: el de que la corrupción era el crimen perfecto, porque no se podía probar. Ella demostró que no se quería probar. Creo que ella, en algunas cosas, ha tenido más coraje y decisión que muchos de nosotros. Creo que ella tiene confianza en que esos intereses han ocluido tanto nuestro desarrollo económico y social que desmontando eso, después, uno empieza a construir una sociedad mejor.

Ahí yo tengo una actitud más arquitectónica. Me parece sí, que hay que pasar la topadora por todo esto pero también hay que tener un proyecto, un diseño. No conozco ningún caso de desarrollo espontáneo ni económico ni social. Yo pongo más énfasis en esas cosas. Me parecen complementarias.

Carrió—A Terragno me une el respeto personal y una amistad que viene de hace muchos años. Pero creo que él ha tenido enormes oportunidades, incluso de implementar sus propios planes económicos, es un hombre que ha ocupado grandes cargos en los poderes Legislativo y Ejecutivo, y creo que hace tiempo tendría que haberse dado cuenta de que hay que construir desde otro lugar. En cuanto al desarrollo económico nosotros tenemos economistas, como Rubén Lo Vuolo y estamos diseñando la matriz que es básicamente la de los estados escandinavos, es decir hay una matriz de crecimiento que debe ser al mismo tiempo una matriz de redistribución con fuertes exigencias fiscales pero que no haya derrame, sino una matriz de equidad que lleva al crecimiento sostenido y equilibrado con distribución del ingreso. El ARI está trabajando profundamente en eso. Pero creo que primero hay que devolverle el poder a la política, que es desmontar el estado mafioso.

COLOMBIA

Los presidenciables, desde la perspectiva de Augusto Ramírez Ocampo

En diálogo con EL TIEMPO, Augusto Ramírez Ocampo, quien renunció a su aspiración presidencial esta semana, dice que Horacio Serpa trae la carga del Gobierno Samper y que tendrá que deshacerse de los politiqueros para tener un buen gobierno; que Uribe Velez será frenado por eventuales avances en el proceso de paz; y que Noemí Sanín necesita a los conservadores para ganar la Presidencia. Es pesimista sobre el Partido Conservador y el proceso de paz.

¿Qué detonó su renuncia?

Cuando me persuadí de que el Partido Conservador estaba muriéndose y que cada uno de los microempresarios lo que tenía pensado era salir a la estampida.

¿Qué otros motivos lo llevaron a tomar esa decisión?

Primero, el tema de los recursos económicos. Uno de los candidatos ha dicho que para llegar a la segunda vuelta se necesitan 17 mil millones de pesos. Segundo, que la política se ha deteriorado gravemente. En este momento hay 68 partidos y movimientos inscritos en la Registraduría y están en cola 82 más. Habrá más partidos que curules en el Senado.

El conservatismo no ha sido capaz de renovarse.

Se han hecho intentos, como cuando se incorporó a la doctrina social de la Iglesia. Por eso tenemos que rechazar el neoliberalismo. Los dos últimos gobiernos fueron fatales.

¿Incluye a Pastrana?

No creo que el presidente Pastrana sea neoliberal, pero sí tiene y ha tenido muchos ministros neoliberales. El mejor ejemplo es Juan Manuel Santos.

¿El Presidente Pastrana es el enterrador del Partido Conservador?

(Guarda silencio durante varios segundos). No creo. Los presidentes Pastrana y Betancur fueron elegidos por movimientos nacionales, que son de la esencia del conservatismo. El Partido desde 1932 no gana elecciones.

Entonces, ¿quién es el enterrador?,

Todos a una.

Se dice que su renuncia fue motivada por jugadas de Fabio Valencia. ¿Cuáles fueron?

En Roma, nos reunimos el Canciller y yo con Fabio Valencia, conociendo unas reglas de juego, ya que era absurdo que seis funcionarios del Gobierno saliéramos a disputarnos la candidatura. Una de las reglas fue que la fecha de salida del Gobierno tenía que ser un año antes de las elecciones presidenciales, aunque los embajadores no tienen esa restricción. Con esas reglas jugamos todos, aunque al comienzo se presentó una falla con las idas y venidas de Luis Fernando Ramírez, quien en dos días cambió seis veces de posición y también de razones para salirse del Ministerio de Defensa, pero nunca se supo cuál era la verdadera. Aparte de eso, las reglas se cumplieron. En el último almuerzo que tuve con Fabio Valencia, me dijo que había venido de Roma a pedirle al Presidente que lo dejara en la Embajada de Roma hasta el último día de su mandato.

¿Ve al Partido Conservador cerca de Noemí?

Noemí ha tenido el acierto de posicionarse como independiente e, inclusive, ha repudiado al Partido Conservador. Creo que ella, tarde o temprano, va a tener que darse cuenta de que los 2,5 millones de votos del Partido Conservador son esenciales para ganar la Presidencia.

¿Cómo ve el país si gana Horacio Serpa?

Muy igual a como es ahora. Desafortunadamente, Serpa trae la carga del gobierno Samper y para hacer un buen gobierno va a tener que liberarse de la clase politiquera.

¿Si gana Álvaro Uribe?.

No creo que gane, porque no creo que el país haya llegado a ese extremo de polarización. Sé, y eso me costó caro durante la campaña, que defender la necesidad de una solución política negociada al conflicto armado ha perdido fuerza. Eso explica el alza de Uribe.

Eso es grave y ha puesto a Serpa, que era muy amigo de la paz, a endurecer su lenguaje. Eso desgasta a Serpa, pero no le resta a Uribe, que tiene dos jefes de debate: el 'Mono Jojoy' y Antonio García'. Este país es cíclico. Si se avanza en el proceso de paz, seguramente se frenará el alza de Uribe.

Jan Egeland, como vocero de la ONU, ha dicho que las balas no le abren el camino a la paz. Con eso, Uribe ya tiene la respuesta de las Naciones Unidas y no podrá contar con ellas para aplicar su propuesta de la presencia de los casos azules.

¿Y cómo ve el país si gana Noemí?

Será bien gobernado, porque tiene un buen equipo. Lo importante es que demuestre que ella dirige el equipo y no que el equipo la dirige a ella, porque dentro de su equipo hay una predominancia muy grande de lo que fue la política de Gaviria, es decir, neoliberal.

¿Cómo ve el proceso de paz con las Farc?

Mal.

Para mantener la propuesta de la solución negociada, ¿qué se debe hacer?

Se necesita tener la consulta permanente con el Frente Común por la Paz y con el Consejo Nacional de Paz y ejercer cuatro presiones sobre la Mesa de Negociación: económica, de la opinión pública, de la comunidad internacional y militar. La guerrilla ha quedado notificada de que por las armas no puede llegar al poder.

Se debe hacer un acuerdo humanitario para sacar a la sociedad civil del conflicto armado y realizar un cese de hostilidades. Y el cese del fuego debe ser multilateral y verificado internacionalmente.

EL SALVADOR Y EL PLAN COLOMBIA

2 DE SEPTI, 2001

Reportaje especial Revista Vértice

Soldados en cielo ajeno

Las alas salvadoreñas del Plan Colombia

En los últimos meses, personas vinculadas a la controvertida empresa estadounidense de fumigación DynCorp llegaron al país a la búsqueda de pilotos experimentados de helicópteros de la Fuerza Aérea. Su intención es que éstos participen en las arriesgadas operaciones de irrigación de veneno a plantíos ilegales que se desarrollan dentro del Plan Colombia. A pesar de los peligros que conllevan estas acciones, la posibilidad real de un atractivo salario aparece como la principal razón que ya ha llevado a algunos a aceptar la oferta.

Ana Lidia Rivera

No se instalaron en una oficina ni comenzaron a repartir solicitudes. Las relaciones que se establecieron entre pilotos salvadoreños y asesores militares estadounidenses durante la guerra bastaron para que a algunos oficiales de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS) les naciera la oferta de un contrato por dos años: siete mil dólares mensuales (61 mil 250 colones), es decir 168 mil dólares en 24 meses (un millón 470 mil colones), por pilotar los helicópteros que custodian las operaciones de fumigación de glifosato en Putumayo y Caquetá, en el sur de Colombia, donde además de coca y amapola existe una nutrida presencia de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.

No importó el riesgo. Fruto de estos contactos, dos ex oficiales de la FAS, con amplia experiencia en vuelos de combate, ganada durante el conflicto, se encuentran en estos momentos participando de esas operaciones de la mano de la empresa fumigadora DynCorp, contratada por el Departamento de Estado norteamericano para esta tarea.

Los contactos funcionan por múltiples vías además de la relación con los estadounidenses. Oficiales colombianos que coincidieron con pilotos salvadoreños durante entrenamientos en bases militares norteamericanas también han hecho sus ofertas. Un ex capitán de la FAS, que en la actualidad tiene su propio negocio, comenta que un oficial colombiano procedente de Estados Unidos le hizo hace unos meses el ofrecimiento, en términos confidenciales. Él lo rechazó.

"No acepté porque, gracias a Dios tengo una buena posición con mi empresa. Pero no puedo decir que de ese agua no beberé", explica.

Según el oficial, cuyo nombre no será revelado, como el de ninguno de los involucrados en este reportaje, este tipo de contactos funciona siempre bajo un estricto carácter confidencial. "No es

que mandés tu currículum", bromea. Para este oficial, que muestra ambigüedad a la hora de valorar la determinación de sus dos colegas pilotos que ya se encuentran en Colombia, 7 mil dólares mensuales no compensan una separación familiar y el riesgo que implica una guerra.

"Puedo hacerlo en una guerra por mi país, como lo hice por diez años, pero esto es como si se tratara de mercenarios". Sin embargo, el oficial, que no pasa de los 35 años y en cuya oficina lucen numerosos diplomas de especialización en manejo de helicópteros, se detiene en su comentario y reflexiona sobre la posible razón que llevó a sus compañeros a involucrarse en aquella empresa.

"Creo que está mal ocupado el término. Realmente, creo que el factor económico es lo que los ha llevado a tomar esa decisión, porque no estamos hablando de operaciones comerciales, sino de operaciones de guerra en otro país", razona. "No están haciendo ningún mal; al contrario, están aportando su experiencia a una causa justa, como es la lucha contra el narcotráfico".

Considera que la experiencia en operaciones aéreas de helicópteros en El Salvador superó incluso a la del conflicto del Vietnam, por lo que afirma que los pilotos salvadoreños se cotizan bien en el mercado. "Aquí se mejoraron las operaciones nocturnas; se hicieron misiones que no se hicieron en Vietnam; nos cualificamos en el uso de los visores infrarrojos y en evitar el impacto de misiles tierra-aire. Tácticamente, nos pulimos. Y eso se cotiza", afirma.

Con esperanza

Muchos pilotos, dentro y fuera de la FAS, se entusiasman al pensar lo que significaría para ellos ser contratados por DynCorp.

Un oficial de pilotos en servicio activo, actualmente jefe de una unidad, declaró recientemente a un medio de prensa estadounidense que espera un posible contrato con la empresa. Hace un año, según relató el oficial, vino al país el asesor militar norteamericano David Campbell, a quien conoció en una base militar de Alabama y que ahora se encuentra destacado en Colombia. "Buscan pilotos con 3 mil horas de vuelo y con experiencia de combate", le explicó.

En las declaraciones, el oficial reconoce que la razón principal que lo llevaría a participar en el Plan Colombia es económica. "Cuando volábamos en El Salvador, durante la guerra, lo hicimos por valores patrióticos, para vencer al comunismo. Ahora es por dinero".

Sorpresa

La información sobre lo que pasa entre algunos de los miembros de la FAS tomó por sorpresa a su principal jefe, el coronel Milton Andrade.

Este veterano de la guerra, fundador del Escuadrón de Helicópteros en los años ochenta, reconoce que los pilotos que en su momento solicitaron la baja para participar en el Plan Colombia –"si es que lo han hecho", matiza–; actuaron a título personal; "La institución castrense no tiene en absoluto nada que ver", afirma.

Según el jefe de la FAS, no es la primera vez que sus pilotos solicitan la baja para irse a trabajar al sector privado. Ocurre frecuentemente con la aerolínea nacional de Transporte Aéreos de Centro América (TACA), donde en la actualidad vuelan más de 50 pilotos provenientes de la FAS.

Igual fenómeno se da con los mecánicos de aviación de la FAS, que también son atraídos por los salarios que les ofrece esta empresa. El oficial se lamenta por la pérdida de su gente, por un lado por la experiencia que atesoran, y por otro por la inversión estatal en ellos. Los costos de la

formación completa de los pilotos de ala fija (aviones) y rotativa (helicópteros) ronda los 250 mil dólares (dos millones 187 mil 500 colones).

"Cada vez que TACA adquiere aviones, nosotros temblamos, porque sabemos que gente pedirá la baja". Andrade retoma el tema sobre las razones que llevaron a sus pilotos a pedir la baja en el caso de Colombia; "hay que analizar de forma individual los casos para poder entender sus razones", señala, "pero de lo que sí estoy seguro es de que lo que están haciendo no es ilícito". Hecha esta aclaración, afirma que cree que la decisión está bien.

Otro sorprendido por la contratación de oficiales salvadoreños por DynCorp para el Plan Colombia es el recién nombrado agregado militar de Colombia en el país, teniente coronel Noel Nieto Polanco. El militar aseguró a Vértice que las operaciones son realizadas por agentes netamente colombianos. "La verdad es que nosotros no sabemos de eso; no sé nada relacionado con esa empresa". "Además, los asesores estadounidenses sólo capacitan a nuestra gente", afirma, "y ayudan en el mantenimiento del equipo militar".

¿Qué es DynCorp?

En la página web de la embajada de los Estados Unidos en Colombia, DynCorp Aerospace Technologies aparece como una empresa privada de fumigación.

De Colombia llegan, anualmente, 300 toneladas de cocaína pura a las calles de las ciudades norteamericanas, y DynCorp fue contratada por el Departamento de Estado para el programa de irrigación aérea que tiene como propósito erradicar el 50 por ciento de los cultivos ilegales en ese país, por un período de seis años.

Pero, en las últimas semanas, la publicación de una extensa investigación en la revista colombiana Semana, sobre irregularidades en la contratación de esta empresa y el involucramiento de algunos de sus miembros en el tráfico y consumo de heroína y cocaína, plantea muchas interrogantes.

La investigación de Semana, titulada "Mercenarios", consigna que en mayo de 2000 la Policía Aeroportuaria destacada en El Dorado, en Bogotá, inspeccionó una carga que iba a ser enviada a Estados Unidos. Los policías hallaron una caja de cartón con dos frascos marcados "AOAP". Contenían un líquido viscoso que despertó sospechas. Se determinó realizar un narcotest con una efectividad del cien por cien. El reporte oficial estableció la presencia de heroína.

Lo que más sorprendió a las autoridades fue el remitente de ese paquete: DynCorp. Los frascos tenían como destino la base aérea de Patrick, en Florida. A pesar de la gravedad del hecho, la historia no se conoció hasta un año después, a través del diario canadiense "The Nation". El artículo se fundamentó en un documento interno de la DEA, publicado después de que el periódico acudiera a una ley que ampara la libertad de información en EE.UU.

El hallazgo de El Dorado se judicializó, pero la fiscal que lleva el caso aún no se ha pronunciado. El pasado julio, la embajadora estadounidense en Colombia y ex embajadora en nuestro país, Anne Patterson, negó la veracidad de la información. El contenido de los frascos, según la diplomática, era aceite para helicópteros.

Pero sobre DynCorp pesa también la sombra de la muerte de uno de sus paramédicos, Michael Demons, de 29 años. Según los informes publicados, Demons, asentado en la base militar de Tres Esquinas, en Caquetá, Colombia, falleció tras sufrir un ataque cardíaco. Las pruebas forenses demostraron que la causa de la muerte había sido una sobredosis de cocaína. Los documentos de medicina legal desaparecieron.

"Semana" plantea, además, que DynCorp no está bajo el control de ninguna entidad colombiana. Sus únicas relaciones formales en Colombia son con la NAS, la oficina que canaliza los recursos aprobados por el Congreso de Estados Unidos. El Departamento de Estado condicionó la ayuda a la presencia de DynCorp.

Según el contrato, personal de DynCorp va en helicópteros acompañando las operaciones de fumigación. Se trata, oficialmente, de pilotos y médicos, no de artilleros. Estos contratistas dan apoyo a operaciones antinarcóticos, y nunca entran en combate.

Pero, a diferencia de los casi 200 asesores militares de Estados Unidos en el país, los hombres de DynCorp no tienen órdenes de evitar combates. Los pilotos ingresan a Colombia con visa de turistas y permanecen 15 días en bases militares. Pasados los 15 días, salen del país para descansar dos semanas, y regresan de nuevo.

¿Soldados de fortuna?

Se hacen diversos análisis de la participación de oficiales no colombianos en este complejo conflicto.

El Director del Centro Latinoamericano y del Caribe de la Florida International University, Eduardo Gamarra, estima que son contratados como profesionales. "Yo no los clasificaría como mercenarios. Son gente especializada que realiza un trabajo especializado", dice, y hace una analogía: "Si tengo problemas graves de hormigas en mi jardín, llamo a una compañía de fumigación; si mi vecino se molesta y me sale con disparos, la próxima vez llamo a la Policía".

Para él, las tareas de fumigación no pueden calificarse como operaciones de guerra, pero considera que hay una "doble moral" en el Plan Colombia: "Es el reflejo de la política oficial de ese país, no es una imposición del gobierno estadounidense".

La posición anterior se aleja de la del salvadoreño Leonel Gómez, analista especializado en la política norteamericana en Centroamérica. Para Gómez, la contratación de oficiales salvadoreños es reflejo de la ausencia de voluntad política por parte de Washington en el combate contra el narcotráfico. "Yo le veo problemas éticos. Están contratando carne de cañón, que además les sale barata". Según cree, este tipo de prácticas ya en el pasado han dado pobres resultados. "Vietnam es el más patético de los ejemplos".

Por su parte, William Walker, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Florida International University, cree que el uso de pilotos centroamericanos en Colombia, con la aprobación del gobierno norteamericano, puede convertir un conflicto civil local en un conflicto con características regionales.

"Esto demuestra el compromiso de Estados Unidos por querer enfrentar el problema de las drogas, como siempre ha sido el caso, desde fuera de Estados Unidos", afirma. "Convertir el conflicto colombiano en un conflicto 'by proxy', es decir, que unos segundos hagan el trabajo a través de la delegación del poder, no debería sorprender a nadie. Desde el colapso de Estados Unidos en Indochina se ha seguido una política de 'dos proyecciones' siempre que ha sido posible".

Ello ocurre mediante el empleo de la fuerza de manera limitada, mediante conflictos de baja intensidad, y logrando que otros provean la fuerza militar para el combate. "Esta práctica sigue la doctrina de Nixon, diseñada para usarse en otros lugares, excepto en Asia", explica Walker.

"Pero en Latinoamérica, donde los conflictos han sido de larga duración, como es el caso de Colombia, si se logra que los latinoamericanos se combatan a sí mismos, es más factible conseguir fondos del Congreso para asistencia militar", opina.

Walker considera como un axioma que a los extranjeros contratados para un conflicto, debe llamárseles "mercenarios", y se pregunta: "¿El Presidente Pastrana ha puesto en venta la soberanía de su nación a unos extranjeros, debido a que sus esfuerzos para finalizar el conflicto han fracasado?"

"Desde la era de Reagan", señala Walker, "cuando fracasó en solucionar los conflictos en Centroamérica mediante la fuerza, Washington ha tratado de usar la guerra en contra de las drogas como una manera de continuar su hegemonía en la región". Según él, el esfuerzo ha sido un éxito.

"Cada Jefe de Estado que mencione el problema de las drogas como una amenaza a la seguridad nacional está aceptando la hegemonía de Estados Unidos", afirma. "Cada Jefe de Estado que militarice el combate contra las drogas con ayuda de Los Estados Unidos cede a la hegemonía de Estados Unidos, más económica que política. Y lo más importante quizás: es cultural".

"La opinión pública estaba dividida en lo que se refería a Centroamérica, contrario al caso de la lucha antidrogas, donde el pueblo norteamericano la apoya. Entonces se apoyará una política exterior que se dirija a combatir a las drogas, cueste lo cueste", continúa Walker.

Finalmente el analista estadounidense señala que pagar a extranjeros para que peleen en Colombia se ha convertido en una manera perversa, de la realización de un ideal panamericano: "Dejemos pelear a los latinoamericanos por los valores y metas estadounidenses que ellos mismos han adoptado".

La urbanización del conflicto

El politólogo Alfredo Rangel Suárez analiza por qué, cómo y cuándo las Farc trasladarán la guerra del campo a las ciudades.

Aun cuando el anuncio de las Farc de llegar a las ciudades es reciente y en boca del Mono Jojoy disparó con razón las alarmas, en realidad este es un viejo propósito de ese grupo insurgente. En efecto, ya en la Séptima Conferencia realizada en 1982, las Farc definieron su estrategia militar de largo plazo, ubicando la Cordillera Oriental como el eje del despliegue de su fuerza armada, es decir, el área donde se realizaría el esfuerzo prioritario de control territorial. De la misma manera, señalaron a Bogotá como el centro de ese eje, o sea el objetivo principal hacia donde debería converger, mediante maniobras envolventes, el grueso de sus hombres en armas. Esta estrategia también implicaba movimientos de cerco y hostigamiento a las principales ciudades del país.

Este planteamiento de las Farc coincide con la vieja estrategia definida por Mao Zedong para China en la década del 30, que denominó como guerra popular prolongada. Según esta estrategia, las guerrillas debían desarrollar una lenta acumulación de fuerzas, creando en sus inicios bases de apoyo en zonas muy apartadas y evitando enfrentamientos desventajosos y definitivos con el Ejército regular. Posteriormente las guerrillas se irían cualificando, adquiriendo más apoyos políticos y mayor capacidad de combate, hasta lograr un equilibrio de fuerzas con su adversario. En este proceso los insurgentes deberían ir saliendo de sus zonas de apoyo y, manteniendo su retaguardia segura, iniciar un parsimonioso cerco desde el campo hacia las ciudades. En líneas gruesas, este es el sendero que han seguido las Farc en sus casi 40 años de existencia.

Para cumplir con su estrategia de 1982 las Farc se señalaron como plazo cerca de 10 años, al cabo de los cuales deberían haber crecido hasta tener 56.000 hombres, para luego iniciar la etapa final de cerco y toma de las ciudades. No lograron cumplir sus metas en el plazo establecido y tuvieron que ajustar sus planes, pero durante estos 20 años han venido creando decenas de nuevos frentes a lo largo y ancho del país, a través de la Cordillera Oriental y cerca de algunas de las principales ciudades.

No hay que hacerse ilusiones: con las Farc el progreso en la negociación no traerá la paz, sino que hará más cruda la confrontación. Y llegará a las ciudades.

Sin lugar a dudas, las conversaciones de paz, el fortalecimiento de las Fuerzas Militares del Estado y lo que los dirigentes de las Farc consideran una inminente intervención militar norteamericana, los ha inducido a apretar el paso, imprimiéndole un mayor ritmo al reclutamiento de nuevos combatientes, al acopio de armas y al desarrollo de nuevas formas de operar, para tratar de cumplir con mayor rapidez sus planes estratégicos en los próximos cinco años. Su anuncio de la pronta urbanización del conflicto se inscribe en este marco.

Desde el punto de vista político, llevar con éxito la guerra a las ciudades le otorgaría a la guerrilla una mayor capacidad de negociación con el Gobierno en la mesa de diálogos. Porque una cosa es dialogar en medio de un conflicto que se desarrolla en forma de tomas a pequeños caseríos, y otra cosa es hacerlo en medio de embestidas armadas a los principales centros nerviosos del poder. Por esta razón, y de manera paradójica, el avance en firme de la negociación de la agenda sustantiva marcará el escalamiento hacia la urbanización del conflicto. O sea, no hay que hacerse ilusiones: con las Farc el progreso en la negociación no traerá la paz, sino que hará más cruda la confrontación. Y llegará a las ciudades.

Tal vez las Farc calculen que sus exigencias de reformas y reivindicaciones sociales en la mesa de negociaciones van a encontrar el rechazo de un establecimiento mezquino y miope, lo que les permitirá lograr apoyo de los sectores más marginados de la ciudad –de donde hoy se nutren sus precarios grupos de milicias urbanas–, que se levantarían en apoyo a esas exigencias y a las acciones armadas que realizaría la guerrilla para presionar su aceptación. Si esta situación ocurriera se acercaría mucho al sueño dorado de cualquier grupo insurgente, que es el levantamiento espontáneo de la población en su favor y en contra del sistema, lo que configuraría la existencia de una coyuntura revolucionaria que sería el momento previo al asalto a la fortaleza enemiga y a la subsiguiente toma del poder.

Pero la vida real es mucho más complicada. Históricamente, es en las ciudades donde las guerrillas han recibido los mayores golpes de las fuerzas de seguridad del Estado. Felipe Torres, Antonio Galán y el Chino, del Eln, fueron capturados en las ciudades. Casi toda la cúpula del M-19 fue capturada o muerta en las ciudades; a este grupo, que se movía como pez en el agua en las zonas urbanas, le tocó replegarse al campo para poder sobrevivir. Además, para una guerrilla tan profundamente campesina como las Farc, su llegada a las ciudades no será cosa fácil. De entrada, no cuentan con el apoyo de las clases medias, ni del sector estudiantil, ni de los intelectuales, que tradicionalmente han sido los apoyos de todas las guerrillas urbanas del mundo. La izquierda urbana y legal en Colombia mira a la guerrilla con desconfianza, mientras una y otra se observan con recelo pues se están disputando el mismo espacio político, sólo que la izquierda legal lo hace en situación de desventaja, debido al inmenso protagonismo político que brinda la lucha armada. De hecho, la guerrilla más bien parte con una inmensa opinión desfavorable en las ciudades, situación que es totalmente diferente de la simpatía que pudieron haber generado otros grupos insurgentes entre algunos sectores urbanos hace 20 ó 30 años.

Históricamente, es en las ciudades donde las guerrillas han recibido los mayores golpes de las fuerzas de seguridad del Estado.

La guerrilla no ha logrado encontrar un lenguaje ni un mensaje que le permita el acceso y le otorgue el apoyo de las clases medias, y tal vez esto no le preocupa. Su visión del mundo es tan campesina y rural, que más bien ve las ciudades y a los ciudadanos como extraños, cuando no como adversarios. La percepción que hoy tienen de lo urbano es asimilable a la que difundió Régis Debray en la ilusa década del 60, cuando afirmaba que la vida en las ciudades aburguesaba al revolucionario y que por ello la única fuente de revolucionarios verdaderos estaba entre el campesinado. Aun cuando las Farc siempre despreciaron la teoría del foco guerrillero que pregonaron los cubanos, cuyo ideólogo era Debray, sin embargo su visión sobre las clases medias urbanas se les parece mucho. No obstante, no es descartable que hacia el futuro las Farc intenten corregir esta falla ideológica y que aprovechen las negociaciones de paz precisamente para intentar acceder y ganarse la simpatía de estos sectores de clase media, pero también de quienes hoy militan en la izquierda legal.

Las Farc deben haber evaluado bien la experiencia de otras guerrillas en América Latina, en especial la salvadoreña, que tuvieron en la urbanización del conflicto su punto más débil y que, a la larga, les impidió derrotar al Estado y tomarse el poder. En efecto, a pesar de que en El Salvador el FMLN tenía una gran influencia sobre los sindicatos y muchas organizaciones comunitarias urbanas, el grueso de la población de las ciudades no respondió en el momento decisivo a los llamados de la guerrilla a la insurrección general. Esto fue lo que dio al traste con sus llamadas ofensivas generales, lo que a la postre les convenció de que, una vez cerrada la posibilidad de una victoria militar, la salida negociada se perfilaba como la única salida al conflicto.

La carencia de apoyos significativos en las ciudades hará de la urbanización de la guerra en Colombia una versión distinta a la que se presentó, por ejemplo, en el caso salvadoreño. En este país las importantes bases urbanas con que contaba la guerrilla le permitieron librar durante sus grandes ofensivas una especie de guerra de posiciones en la que los insurgentes y las Fuerzas militares salvadoreñas se disputaron ferozmente el dominio territorial en las ciudades, casa por casa y barrio por barrio.

En Colombia, en contraste, la falta de esos apoyos posiblemente impida a la guerrilla desarrollar ese tipo de guerra urbana y tal vez la obligue a realizar acciones de cerco y hostigamiento en las inmediaciones de las ciudades, en las que utilice mayormente el sabotaje económico para, por ejemplo, cortar los suministros de energía, impedir el acceso de provisiones y víveres, y restringir la llegada y salida de personas y de mercancías por vía terrestre. Igualmente, la guerrilla podría realizar ataques a cuarteles militares dentro o cerca de las ciudades, los cuales abundan en un país como el nuestro donde los ciudadanos aprecian su presencia como una cuestión de estatus y de reconocimiento frente a otras ciudades. Valores simbólicos muy respetables y muy apreciados por las mismas Fuerzas Militares, pero que en medio de una guerra podrían resultar, por decirlo suave, poco funcionales.

La carencia de apoyos significativos en las ciudades hará de la urbanización de la guerra en Colombia una versión distinta de la del caso salvadoreño.

Para realizar ataques a esas bases militares, así como para efectuar otros actos de sabotaje en blancos civiles dentro de las ciudades, las Farc estarían entrenando grupos de fuerzas especiales, como los que ya probaron en el copamiento de un edificio en la ciudad de Neiva. Pero también podrían estar desarrollando nuevos tipos de explosivos, mucho más potentes que los que disponen actualmente, y nuevas tecnologías de destrucción. Con este propósito, las Farc estarían echando mano a la abundante experiencia disponible en el mercado internacional, entre ellas la del FMLN y el Ira.

En efecto, la guerrilla salvadoreña desarrolló hasta el perfeccionamiento el sabotaje con grupos de zapadores que penetraban sigilosamente las bases militares, sea burlando sus muros o a través de túneles, para atacarlas y, muchas veces, destruirlas desde dentro. En esto fueron sus maestros los guerrilleros vietnamitas del Vietcong. Los irlandeses son expertos en el diseño, fabricación y detonación de explosivos, así como en la utilización de morteros. De hecho, con disparos de morteros, al Ejército británico le destruyeron helicópteros cuando aterrizaban en bases militares cercanas a las ciudades.

Se sabe que en Colombia hoy por hoy las Farc tienen frentes en las cercanías de Bogotá, Cali, Medellín, Neiva, Popayán, Florencia y Villavicencio, cuando menos. En cualquiera de estas podrían iniciar sus acciones de hostigamiento y sabotaje. Sin embargo, es preciso señalar que éste es un grupo insurgente imbuido en su cúpula dirigente de una ideología marxista muy ortodoxa que desprecia el terrorismo como forma principal y permanente de lucha, aun cuando no descarta el sabotaje como recurso bélico extremo. Esto significa que cuando las Farc inicien sistemáticamente el sabotaje urbano y los asaltos a cuarteles militares alrededor de las ciudades, estarán comenzando a realizar su apuesta de fondo para la definición política o militar del conflicto. Para ese momento es que hay que estar preparados.

Se degradó la violencia urbana

El sadismo de la violencia común está superando de lejos la tradicional crueldad de guerrilleros y 'paras'. Las dos últimas semanas muestran muchos casos de atrocidades en varias ciudades.

Por ejemplo, un indigente descuartizado e incinerado en Pereira; cuatro cadáveres con estacas en el corazón, en Medellín; un violador muerto a garrotazos en Sucre; dos hombres torturados con plancha casera en su propia casa, en Cali.

Todos estos episodios tienen como protagonista a la delincuencia común e, inclusive, a vecinos comunes de barrio, sin antecedentes legales ni de mal comportamiento.

Por saber qué se siente matar

El caso de Pereira es el más sintomático. Allí, dos adolescentes de 16 años, primas entre sí, asesinaron y luego quemaron a un indigente, según ellas, para experimentar lo que se siente al matar a alguien.

El cadáver del hombre fue hallado en el centro de esa capital, desmembrado de brazos y piernas y sin cabeza, el 23 de agosto. Ese día, a las 5 a.m., vendedores callejeros reportaron la presencia del cuerpo todavía en llamas. El hecho causó estupor en Pereira, e inicialmente se pensó que podía tratarse de un ajuste de cuentas de narcos.

El cuerpo fue identificado como José Jesús Arenas Caicedo, de 39 años, oriundo del departamento de Caldas, quien aparecía en los archivos judiciales con antecedentes relacionados con hurto y estupefacientes.

Cinco días después, la Policía de Risaralda reportó la captura de dos menores presuntamente relacionadas con el crimen. Según se indicó, ellas relataron que querían sentir la sensación de matar a alguien y demostrar ante el 'parche' (grupo) de lo que eran capaces.

Para su cometido habrían preparado un caldo de ojo de res y a las 2 de la mañana, paradas en la puerta de un sótano abandonado, esperaron a que pasara alguien. Habrían determinado que su víctima sería un indigente, por quien nadie reclamara.

Luego de que el hombre devoró el caldo, las mujeres le dieron muerte a machete. Desmembrado, el cadáver fue llevado hasta un punto a dos cuadras, a orillas de la Avenida 30 de agosto. Le rociaron thinner y le prendieron fuego. Al parecer, estaban bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

De acuerdo con la investigación, luego exhibieron la cabeza y el corazón de su víctima ante sus amigos. Eso condujo a su captura y hoy están a disposición del Juzgado Primero de Menores de Pereira.

Ayer, la Policía reportó la detención de un hombre que estaría relacionado con este mismo caso.

De acuerdo con el artículo 219 del Código del Menor, las dos adolescentes probablemente sean remitidas a un establecimiento especial hasta que cumplan los 21 años. También se puede determinar su envío a un centro de salud mental.

Muerte a garrote

Apenas tres días después del episodio de Pereira, en medio de un ataque de ira, Manuel Antonio Ríos Julio la emprendió a garrote contra su sobrino William Contreras Ríos, hasta matarlo. Cuando se entregó a la Policía, contó que lo había hecho en venganza, después de descubrir a William violando a su hija de 9 años, la cual fue muerta a golpes. El caso ocurrió el pasado 26 de agosto en la vereda Santa Rosa, municipio de El Roble (Sucre).

“Sin pensarlo, me le lancé y forcejeamos... le di una y otra vez, hasta que cayó al suelo”, contó Ríos ante el estupor de sus vecinos, que hasta ese día lo veían como un padre pacífico y dedicado a su hogar.

Diferentes torturas

En Cali, delincuentes les demostraron a las autoridades que pueden llegar a no tener ningún escrúpulo con sus víctimas.

Con una plancha a alta temperatura, dos asaltantes torturaron a Ancízar Cárdenas y a John Lindo Cáceres para obligarlos a que les entregaran 20 millones de pesos en su propia casa. Como Cárdenas se negó a darles el dinero, los delincuentes conectaron una plancha y le quemaron los brazos y los pies, y le provocaron quemaduras de segundo y tercer grado en un muslo, los glúteos y en uno de sus hombros.

En los últimos dos meses, han aparecido en Medellín cinco cadáveres torturados, cuatro de ellos con una estaca clavada en el corazón.

Las autoridades creen que se trata de venganzas entre narcotraficantes, pero nadie se atreve a confirmarlo. Los cadáveres siempre aparecen amarrados de pies y manos, y presentan, además de la estaca en el pecho, signos de tortura, como cortadas, quemaduras y golpes en el cuerpo.

Los investigadores han descartado que se trate de satanismo, pues no obedece al modo de operar de quienes lo practican.

El caso más reciente de sevicia ocurrió el fin de semana pasado en Roldanillo (Valle), donde fue asesinado el sacerdote católico Héctor Fabio Vélez Jaramillo, de 53 años.

Delincuentes lo mataron a golpes en su vivienda del corregimiento Santa Rita. Según el informe del legista, el padre recibió golpes en la cabeza, al parecer con un bloque de madera, que le destruyó el cráneo.

¿A qué se debe?

La antropóloga Marta Lucía de la Cruz, gerente del Convenio del Buen Trato, asegura que los crímenes crueles se han vuelto comunes por el nivel de descomposición social y de valores de la sociedad colombiana, lo que lleva a no respetar la integridad ni la vida de las personas.

“La gente es capaz de hacer cosas terribles por plata, con tal de conseguirla es capaz de quemar con plancha y secuestrar y esto puede ser un afán de dinero fácil, producto de la mentalidad que dejó el narcotráfico”, dice.

En opinión de la antropóloga, frente a estos hechos los colombianos debemos preguntarnos: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo que esta dando lugar a este tipo de actitudes?

Profesionales que estudian el fenómeno de la violencia están de acuerdo con de la Cruz, y aseguran que la sevicia y la crueldad no se pueden explicar únicamente por la crisis económica o la pobreza.

Sandra Ruiz, médica terapeuta de la Fundación Dos Mundos, tiene dos hipótesis:

“Por un lado, puede estar ligado con el hecho de que la violencia se convierta en un patrón de referencia que hace que a las personas les parezca normal relacionarse violentamente. Esto es una escuela del conflicto armado y hace que la gente no tenga la capacidad de crítica y de reflexión.

“Otro elemento, agrega Ruiz, tiene que ver con la impunidad (que en Colombia es del 94 por ciento, según estudios), pues en la medida en que ocurren estos hechos y no se castiga a los responsables, el ciudadano siente que hay permisividad y que puede pasar cualquier límite sin recibir castigo”.

Por su parte, el siquiatra Pedro Guerrero explica que estos comportamientos pueden obedecer a la forma como actúa el cerebro humano en épocas de crisis.

“Históricamente, asegura Guerrero, cuando hay desestabilización del ordenamiento civil, en este caso causado por el conflicto interno, parece que el cerebro tiende a liberar el control subjetivo de las pasiones y aparecen estas manifestaciones crueles”.

Estas manifestaciones, sostiene Guerrero, acompañaron en nuestro país a la violencia de los años cincuentas y ahora con el conflicto armado tratan de reaparecer.

Los expertos aseguran que estas prácticas no se dan solamente en las ciudades, sino que son generales, cuando se pierde el temor a la autoridad, no se confía en la justicia y aparecen los sentimientos de desesperanza.

Redacción Nacional 4 de septiembre del 2001

Martes 4 de septiembre de 2001

4 de sept.

Desde la cárcel de Carandirú, en Brasil, se coordinó en febrero pasado un motín simultáneo en 29 penales del estado de Sao Paulo. Diez mil familiares fueron mantenidos como rehenes. Archivo / EL TIEMPO

EL TIEMPO

La bomba de tiempo de las cárceles de Latinoamérica

Las prisiones de América Latina repiten la misma historia de hacinamiento, insalubridad, miseria, violencia, drogas, golpizas, sodomía y corrupción. Los ejemplos abundan en Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil, países en los que el número de reclusos sigue creciendo, pero la capacidad de las cárceles sigue igual.

Es el caso de la Cárcel Modelo de Bogotá, la más temida de Colombia, donde no es raro que los presos desaparezcan sin que nadie pueda explicar cuál fue su destino.

El Defensor del Pueblo de Colombia, Eduardo Cifuentes Muñoz, dice que la anarquía es tal que incluso hay denuncias por la desaparición de personas. "La Fiscalía está investigando denuncias del asesinato de presos, cuyos cadáveres han desaparecido. Se presume que los cuerpos están enterrados en fosas habilitadas en el interior de la cárcel", indica Cifuentes.

Allí conviven guerrilleros marxistas y miembros de los escuadrones paramilitares de ultraderecha, narcotraficantes y asesinos, en un ambiente degradado donde es común el consumo de drogas y la corrupción de los vigilantes.

La Modelo "es un cementerio de los muertos vivos", comenta uno de los reclusos condenado por posesión ilegal de armas.

En Venezuela, un sacerdote jesuita que visitó un centro de reclusión afirmó que allí la alimentación de los reos era tan deplorable que "la sopa parece vómito".

Algo mejor es el caso de Argentina, pero aún así dicen que allí las cárceles son "grandes depósitos de seres humanos", con denuncias de palizas graves a los internos y mala asistencia médica, según un reciente informe del Gobierno. El documento denunció la existencia de la "cultura del golpe", una práctica que permite a los guardias tratar a "bastonazo limpio" a los reos.

Peor situación aún se vive en Brasil, donde la Iglesia Católica informó que cada 36 horas se registra una rebelión. Según la Policía brasileña, por lo menos nueve presos murieron en las últimas semanas, asesinados por sus propios compañeros, en el presidio San Antonio de Levenger, 1.147 kilómetros al suroriente de Brasilia.

"Estamos ante una bomba de hacinamiento y violencia, que amenaza con estallar cada día. Los sistemas carcelarios están en una gravísima crisis", sostiene Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).

Causas de la Crisis

Diversas fuentes consultadas señalaron que la crisis actual del sistema penitenciario latinoamericano está inserta en la "preocupante" situación de deterioro social de la región.

Con economías en crisis y constantes recortes en los presupuestos de los países, la situación carcelaria no ocupa un lugar prioritario en la asignación de recursos.

Así, la creciente población carcelaria y la precaria capacidad de las prisiones genera una situación de hacinamiento extremo con situaciones de alta explosividad.

“Cuando los motines y homicidios ocurren en forma alarmante pensamos que es porque se trata de población violenta, pero está comprobado que, por ejemplo, los animales se vuelven violentos en espacios reducidos”, dice el experto de Ilanud.

Otra de las causas de las crisis es la lentitud de los sistemas judiciales, que permiten que en América Latina alrededor del 50 por ciento de los prisioneros no haya sido juzgado, según diversas estimaciones. Esta situación lleva a que, en algunos casos, muchos de ellos terminen cumpliendo condenas más largas de las que les hubiera correspondido por su delito.

Círculo del Delito

Las condiciones de hacinamiento y abusos llevan a que las cárceles se transformen en algo muy distinto a lo que inicialmente se planificó, es decir, instituciones para reformar a los reclusos.

“En la mayoría de nuestras cárceles es imposible sobrevivir si uno no adopta prácticas violentas por el grado de mafias internas, en las mismas policías, en la misma vida carcelaria”, explica Alberto Binder, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales de Buenos Aires. “Al final, el círculo de violencia no cierra, porque nuestras cárceles terminan siendo fábricas de hombres violentos”, sostiene.

Muerte en Carandirú

La caótica situación en el penal de Carandirú, en Sao Paulo, refleja la crisis carcelaria de Brasil. El recinto penitenciario fue inaugurado en 1956.

En sus 427 mil metros cuadrados, Carandirú debía albergar a 3.250 reclusos que aguardaban sentencia. Los planes originales cambiaron en 1975, cuando la cárcel comenzó a recibir peligrosos reos condenados. Hoy, la población penal de Carandirú es de 7.500 personas, que subsisten en condiciones inhumanas en 2.041 celdas.

La cárcel se ha convertido en un campo de batalla incontrolable, donde existen verdaderas empresas del crimen, fugas, compra y venta de armas, drogas y celulares. Carandirú tuvo uno de sus momentos más aciagos el 2 octubre de 1992, cuando un total de 111 presos murieron durante un motín. El grupo de choque de la Policía Militar de Sao Paulo debió ingresar a “sangre y fuego” al pabellón número 9 para dominar una rebelión.

En febrero pasado, Carandirú fue nuevamente noticia, al impulsar un motín simultáneo de 29 cárceles en el estado de Sao Paulo. Dirigidos y coordinados desde teléfonos celulares introducidos en forma ilegal en el presidio, los amotinados tomaron a 10 mil familiares como rehenes, mientras que 19 presos murieron en una verdadera demostración de poder de los reclusos frente a las autoridades.

En abril pasado, el gobernador Geraldo Alckmin anunció el desmantelamiento de la prisión, que deberá ocurrir en marzo del próximo año, mientras que el Presidente Fernando Henrique Cardoso

anunció un aporte gubernamental de 15 millones de dólares para construir once nuevos centros de menor tamaño para albergar a la población actual de Carandirú.